## El aumento de la llegada de inmigrantes a las Islas Canarias es el reflejo de problemas estructurales

Nadie duda de que la situación migratoria en las Islas Canarias va a estar en el orden del día del <u>encuentro</u> de este viernes 20 noviembre que tendrá lugar en Marruecos entre el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo marroquí, Abdelouati Laftit.

Después de varios meses, como lo que ha sucedido en 2006, el flujo de llegada desde Senegal y Marruecos hacia las Islas Canarias ha alcanzado su máximo nivel. A 15 de noviembre, un total de <u>16.950</u> personas han tomado esta ruta desde el principio de este año, lo que significa que se ha multiplicado por seis con respecto a 2019. Este aumento de llegadas conlleva inevitablemente un aumento de personas desaparecidas en el mar. En solo una semana del pasado mes de octubre, <u>480 personas fallecieron</u> o desaparecieron, concretamente, el día 29 de octubre <u>140 personas</u> perdieron la vida frente a las costas senegalesas.

Este aumento de llegadas corrobora los cambios en las vías "tradicionales" migratorias que arrastran a los refugiados a iniciar su pericia en el sur, lo que significa un relativo aumento del riesgo de fallecimientos. Todo ello, nos lleva a la convergencia de dos ejes políticos: un enfoque de seguridad de la migración y una externalización en la responsabilidad sobre la gestión de fronteras en países fuera de la Unión Europea.

En este sentido, en Ceuta y Melilla, situadas en la ruta del norte hacia la Unión Europea, se ha reforzado la seguridad con nuevas vallas aumentando su altura a 10 metros y con nuevos medios de vigilancia desplegados para interceptar a los inmigrantes.

El pasado 6 de noviembre la Comisión Europea visitó las Islas Canarias lo que ha provocado un incremento del papel de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX), al mismo tiempo que España negocia la renovación del acuerdo con la agencia con el fin de evitar todo tipo de llegada de emigrantes a sus islas. Hay que recordar también que FRONTEX está siendo acusada de violentas deportaciones en el Mar Egeo y en el Mediterráneo central, violando así el principio de no deportación.

El reparto de los fondos para los proyectos migratorios entre la Unión Europea y Marruecos -provenientes de los Fondos Fiduciarios de Emergencia de la Unión Europea para África (FFUA)- dirige actualmente las prioridades de la Unión Europea: el 85% de los fondos, es decir 235 millones de euros, se destinan a la gestión de las fronteras con enfoque en seguridad; mientras que sólo el 19,15% se invierte en proyectos de integración y de protección de los derechos humanos.

Los países vecinos de la Unión Europea, limítrofes con el mar Mediterráneo, también recurren y de manera creciente, a la devolución de los migrantes. Por ejemplo, desde el 30 de septiembre de 2020, Argelia ha expulsado de manera violenta a unas 6.747 personas a Níger. Entre octubre y noviembre de 2020, decenas de emigrantes, entre ellos mujeres y menores de edad, fueron <u>expulsados</u> por Marruecos y llevados a Senegal y a Guinea.

Es necesario señalar que la seguridad de las fronteras y la externalización de la gestión no es algo exclusivo de España o de Marruecos. De hecho, es parte integrante del espíritu del <u>Pacto Europeo para la Migración</u>, y de la <u>parte presupuestaria consagrada a la migración dentro del Marco Financiero Plurianual</u>.

EuroMed Rights apela a la Unión Europea y a los Estados Miembros a:

- Cesar de destinar los fondos para el desarrollo de cooperación en países fuera de la Unión Europea a la gestión migratoria y a las políticas de readmisión.
- Asegurar la transparencia de los fondos europeos para proyectos y actividades de cooperación relativos a la migración en Marruecos, e implementar un sistema de seguimiento eficaz para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
- Abandonar el principio de país de origen "seguro" en el que se basa la evaluación individual de las demandas de asilo. EuroMed Rights desea igualmente hacer un llamamiento a que ningún país puede considerarse como seguro.
- Aumentar el número de lugares de acogida en las Islas Canarias para que a todos los que desembarquen se les pueda tratar con dignidad, respetando sus derechos fundamentales, así como <u>reactivar los traslados</u> a la Península.
- Y, por último, implementar las operaciones europeas de búsqueda y salvamento en el mar, así como dejar de criminalizar la ayuda humanitaria dada por organizaciones civiles, ya sea en el mar o en tierra.